



Resolución No. CSJBOR23-1154
Cartagena de Indias D.T. y C., 21 de septiembre de 2023

“Por medio de la cual se decide una solicitud de vigilancia judicial administrativa”

Vigilancia judicial administrativa No: 13001-11-01-002-2023-00697

Solicitante: Edilsa Ramírez Bautista

Despacho: Juzgado 1° Promiscuo de Familia del Circuito de Simití

Servidores judiciales: Bertha María Herrera De Ávila y Lilibeth Atencio Hernández

Proceso: Declaración de unión marital de hecho

Radicado: 13744318400120230007600

Magistrado ponente: Iván Eduardo Latorre Gamboa

Fecha de sesión: 13 de septiembre de 2023

I. ANTECEDENTES

1.1 Solicitud de vigilancia judicial administrativa

Por mensaje de datos recibido el 30 de agosto de 2023 la abogada Edilsa Ramírez Bautista solicitó que se ejerza vigilancia judicial administrativa sobre el proceso identificado con el radicado No. 13744318400120230007600, que cursa en el Juzgado 1° Promiscuo de Familia del Circuito de Simití, debido a que, según afirma, se encuentra pendiente de resolver solicitud de decreto de medidas cautelares.

1.2 Trámite de la vigilancia judicial administrativa

Por considerar que la solicitud de vigilancia judicial cumplía con los requisitos consignados en el artículo 3° del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, mediante auto CSJBOAVJ23-875 del 4 de septiembre de 2023, se dispuso requerir a las doctoras Bertha María Herrera De Ávila y Lilibeth Atencio Hernández, jueza y secretaria, respectivamente, del Juzgado 1° Promiscuo de Familia del Circuito de Simití, para que suministraran información detallada del proceso referenciado, el cual fue comunicado por mensaje de datos el 7 de septiembre de la presente anualidad.

1.3 Informe de verificación

Dentro de la oportunidad para ello, las doctoras Bertha María Herrera De Ávila y Lilibeth Atencio Hernández, jueza y secretaria, respectivamente, allegaron informe bajo la gravedad de juramento (artículo 5° Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011).

La titular del despacho indica que el 11 de julio de 2023 se admitió la demanda y se notificó a las partes, que en el mismo proveído se negó la solicitud de medidas cautelares por no haberse aportado la póliza; esto, de conformidad con lo previsto en los artículos 590 y 598 del Código General del Proceso. Así las cosas, comoquiera que el demandante prestó la caución, se decretaron las medidas cautelares solicitadas, por lo que afirma que no se encuentran dentro de una mora judicial; además, alega que debe tenerse en cuenta la carga laboral del despacho.

Por su parte, la secretaria de esa agencia judicial, indica que a todas las solicitudes allegadas por la quejosa se “les ha realizado la respectiva nota de secretaría” y han ingresado al despacho.

Con relación a la afirmación realizada por la solicitante, sobre la “fuga de información del despacho” indica que son graves y atrevidas las insinuaciones, teniendo en cuenta que las actuaciones que adelanta el despacho son públicas, pues cada una de ellas se publican en los estados electrónicos, los cuales pueden ser consultados por cualquier persona con acceso a internet.

Respecto de la solicitud de decreto de medidas cautelares, afirma que fue resuelta mediante auto adiado el 8 de septiembre de 2022, providencia que fue adicionada el 11 del mismo mes y año.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por la abogada Edilsa Ramírez Bautista, dentro del proceso de la referencia, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la solicitud se dirige en contra de uno de los despachos judiciales de esta circunscripción territorial.

2.2. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe “*para que la justicia se administre oportuna y eficazmente*” y que “*es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias*”, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: *i)* cuestiones de incumplimiento de términos actuales, porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; *ii)* si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y *iii)* si existe una actuación en forma negligente o si, por el contrario, su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación.

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: “*Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones*”. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 5° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma como un funcionario interpreta una norma o valora las pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.

En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

2.3. Planteamiento del problema a resolver

Conforme a la solicitud de vigilancia judicial administrativa y lo informado por las servidoras judiciales, corresponde a esta Corporación determinar si han existido actuaciones y omisiones en el decurso de la actuación dentro del proceso de la referencia, en específico sobre la mora judicial alegada, que involucren un actuar u omisión contraria a la oportuna y eficaz administración de justicia.

En caso de estimarse lo anterior, atendiendo a que el solicitante enuncia circunstancias de mora judicial, se determinará la procedencia de la imposición de correctivos administrativos o compulsas de copias a la jurisdicción disciplinaria contra los servidores judiciales involucrados.

2.4 Caso concreto

La abogada Edilsa Ramírez Bautista solicitó que se ejerza vigilancia judicial administrativa sobre el proceso verbal identificado con el radicado No. 13744318400120230007600, que cursa en el Juzgado 1° Promiscuo de Familia del Circuito de Simití, debido a que, según afirma, se encuentra pendiente de resolver solicitud de decreto de medidas cautelares.

Frente a las alegaciones de la peticionaria, indican las servidoras judiciales que por auto adiado el 8 de septiembre de 2023, adicionado mediante auto del 11 del mismo mes y año, se decretaron las medidas cautelares solicitadas, esto, una vez la quejosa aportó la constancia de pago de la caución.

La secretaria afirma que las solicitudes allegadas por la abogada Edilsa Ramírez Bautista se han ingresado al despacho de manera oportuna para su trámite.

Examinadas la solicitud de vigilancia judicial administrativa, el informe rendido bajo la gravedad de juramento y los documentos aportados, esta Seccional encuentra demostrado que en el trámite del proceso se surtieron las siguientes actuaciones:

No.	Actuación	Fecha
1	Solicitud de decreto de medidas cautelares	08/08/2023
2	Ingreso al despacho	08/08/2023
3	Memorial de impulso procesal	18/08/2023
4	Ingreso al despacho	18/08/2023
5	Comunicación requerimiento de informe dentro de la solicitud de vigilancia	07/09/2023
6	Auto que resuelve decretar las medidas cautelares	08/09/2023
7	Auto que adiciona la providencia del 8 de septiembre de 2023	11/09/2023

Descendiendo al caso en concreto, se tiene que el objeto de la solicitud de vigilancia judicial administrativa se cifiere en la presunta mora en la que se encuentra incurso el Juzgado 1° de Familia de Simití en dar trámite a la solicitud de decreto de medidas cautelares.

Observa esta Corporación que, según el informe rendido por las servidoras judiciales, el 8 de septiembre se profiere auto que resuelve decretar las medidas cautelares solicitadas por la quejosa, esto, con posterioridad a la comunicación del requerimiento de informe efectuado por esta Seccional, llevada a cabo el 7 de septiembre del corriente.

En relación con la doctora Lilibeth Atencio Hernández, secretaria de esa agencia judicial, al revisar el informe y el expediente digital, se encuentra que los ingresos al despacho se llevaron a cabo dentro de los plazos legales o razonables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Código General del Proceso.

“ARTÍCULO 109. PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE MEMORIALES E INCORPORACIÓN DE ESCRITOS Y COMUNICACIONES. El secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba y los agregará al expediente respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá esperar a que este transcurra en relación con todas las partes (...).”

Por lo que, al no encontrarse una situación de mora, será del caso ordenar el archivo del presente trámite administrativo respecto de la doctora Lilibeth Atencio Hernández, secretaria de la agencia judicial encartada.

Ahora bien, con relación a la actuación de la doctora Bertha María Herrera de Ávila, jueza, se tiene que entre el ingreso al despacho de la solicitud, el 8 de agosto de 2023, y el auto que resolvió decretar las medidas cautelares, proferido el 8 de septiembre de 2023, transcurrieron 22 días hábiles, término que supera el establecido en el artículo 120 del Código General del Proceso.

“ARTÍCULO 120. TÉRMINOS PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES POR FUERA DE AUDIENCIA. En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin (...).”

Así las cosas, se observa una tardanza por parte de la funcionaria en emitir pronunciamiento que resolviera lo requerido por la quejosa; no obstante, mal haría esta Corporación en ignorar lo afirmado bajo la gravedad de juramento por las servidoras judiciales, al indicar que esta se encuentra justificada en la capacidad de respuesta logística y humana de la agencia judicial, por lo que se pasará a verificar la información reportada en la plataforma estadística SIERJU respecto del período en el que se presume la mora.

PERÍODO	INVENTARIO INICIAL	INGRESOS	SALIDAS	EGRESOS	INVENTARIO FINAL
2° trimestre de 2023	314	88	1	89	312

Se tiene que la carga efectiva es igual a inventario inicial más ingresos menos salidas, por lo que en el caso del despacho se tiene para el período relacionado:

Carga efectiva para el 2° trimestre del 2023 = (314+88) – 1

Carga efectiva para el 2° trimestre del 2023 = 401

Capacidad máxima de respuesta para Juzgado Promiscuo de Familia para el año 2023 = 414 (Acuerdo PCSJA23-12040 de 2023)

Con base en las estadísticas anteriormente relacionadas, y teniendo en cuenta que la mora que se estudia inició en el 2° trimestre del año en curso, se encuentra que en el tiempo analizado, la funcionaria judicial laboró con una carga efectiva equivalente al 96,85% respecto de la capacidad máxima de respuesta establecida para el año 2023, de lo que se colige la situación de congestión del despacho en cuanto a sus cargas laborales.

Debe precisarse que el Consejo Superior de la Judicatura ha definido la “*capacidad máxima de respuesta*” como punto de referencia para establecer el número límite de procesos que pueden ser atendidos por un juzgado o despacho de magistrado, atendiendo a la capacidad humana y logística con la que cuente dicha oficina para responder a la demanda de justicia; en el caso particular del Juzgado 1° Promiscuo de Familia del Circuito de Simití, se tiene que su carga laboral demuestra la situación de congestión del despacho.

Igualmente, al consultar la producción del despacho en el período estudiado con anterioridad, se obtuvo el siguiente resultado:

TRIMESTRE	AUTOS INTERLOCUTORIOS	SENTENCIAS	PROMEDIO DE PROVIDENCIAS DICTADAS POR DÍA
2° - 2023	125	76	3,59

Según el criterio esbozado por Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la mora sancionable en los funcionarios judiciales será aquella en la que quede demostrado que ha sido la negligencia la que ha reinado y no el trabajo, que a pesar de arduo, no dé el fruto esperado por las partes interesadas en el proceso. Así lo dispuso esa colegiatura en sentencia dentro del proceso N° 110010102000200202357:

“(…) lo anterior conforme a la pacífica jurisprudencia de esta Sala que ha considerado que una de las formas en que se exteriorizan o materializan los esfuerzos de los funcionarios por evacuar su trabajo dice relación con la concreta producción laboral que registra estadísticamente. Para probar tal hecho, esta colegiatura ha convenido entonces en determinar como mínimo uno (1) el número diario de providencias de fondo (sentencias y autos interlocutorios) para mediante un proceso de confrontación con el tiempo hábil específicamente laborado establecer si en cada caso concreto es viable predicar esmero y dedicación en la ejecución de sus tareas propias de su función, y así considerar la excesiva carga de trabajo como la causa irresistible de la mora (…)”. (Subrayado fuera del texto original)

Se tiene entonces, de la aplicación de la fórmula propuesta por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para el período en el que se presume la mora, que la funcionaria judicial presentó una producción superior a la mínima determinada, tal y como se desprende del cuadro señalado en líneas precedentes, cifras que, como producción laboral del despacho supera la establecida por esa sala, por lo que bajo ese supuesto, no habría

lugar a aplicar los correctivos determinados en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011 respecto de la doctora Bertha María Herrera de Ávila, juez 1° Promiscuo de Familia del Circuito de Simití.

Así las cosas, y como quiera que no existe una situación de mora que deba ser normalizada mediante la vigilancia judicial y que se logró demostrar que la tardanza por parte del despacho encartado tuvo lugar en la alta carga laboral, se dispondrá al archivo del presente trámite administrativo respecto de ambas servidoras judiciales.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

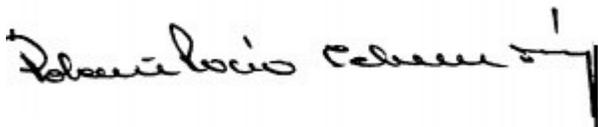
III. RESUELVE

PRIMERO: Archivar la vigilancia judicial administrativa promovida por la abogada Edilsa Ramírez Bautista, dentro del proceso de declaración de unión marital de hecho identificado con el radicado No. 13744318400120230007600 que cursa en el Juzgado 1° Promiscuo de Familia del Circuito de Simití, por las razones anotadas.

SEGUNDO: Comunicar la presente decisión a la solicitante, así como a las doctoras Bertha María Herrera de Ávila y Lilibeth Atencio Hernández, jueza y secretaria, respectivamente del Juzgado 1° Promiscuo de Familia del Circuito de Simití.

TERCERO: Contra esta decisión solo procede recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación o comunicación, ante esta misma corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art. 74 y siguientes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



PATRICIA ROCÍO CEBALLOS RODRÍGUEZ
Presidenta

MP. IELG/MFLH